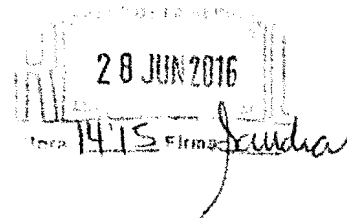




*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

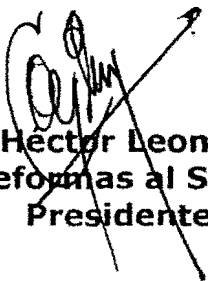


28 de junio del 2016.

Licenciada
Ana Isabel Antillón
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo estipulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto a la presente **DICTAMEN DESFAVORABLE** emitido por esta Comisión a las iniciativas de ley identificadas con números 4941 y 5038 "**LEY PROCEDIMENTAL DE LA PENA DE MUERTE y LEY REGULADORA DE LA CONMUTA DE LA PENA EN LOS CONDENADOS A MUERTE**" para su trámite correspondiente.

Atentamente,


Dip. Hector Leonel Lira
Comisión Reformas al Sector Justicia
Presidente





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA

D I C T A M E N

Honorable pleno

Con fecha 4 de febrero de 2016 y 21 de abril de 2016, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Reforma al Sector Justicia, para su estudio y dictamen las iniciativas identificadas con los Registros Números 4941 y 5038 de Dirección Legislativa, presentada por los Diputados Roberto Ricardo Villate Villatoro y Marcos Fernando Yax Guinea (y compañeros), que disponen aprobar "LEY PROCEDIMENTAL DE LA PENA DE MUERTE" y "LEY REGULADORA DE LA CONMUTA DE LA PENA EN LOS CONDENADOS A MUERTE", respectivamente, para que se pronuncie sobre su importancia y conveniencia.

ANTECEDENTES:

Previo a hacer el análisis de forma y fondo correspondiente, es necesario revisar la legislación nacional e internacional aplicable a la pena de muerte en Guatemala.

1. Guatemala suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹, "Pacto de San José de Costa Rica" el 22 de noviembre de 1969.
 - Ratificó la Convención el 25 de mayo de 1978; y,
 - Reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
2. Según el artículo 4 de la Convención:
"Artículo 4. Derecho a la Vida

¹Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resumen de Estados que han Ratificado la Convención, vínculo: <http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm>, fecha de consulta 19/jun/2016.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido."
3. Según la opinión consultiva OC-3/83 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la consulta sobre si *¿Puede un Gobierno aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su legislación interna, al momento de entrar en vigor para ese Estado la Convención Americana sobre Derechos Humanos?* La Corte opinó:
- "56. (...) No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga a delitos para la cual no estaba prevista anteriormente"².
 - 57. En esta materia la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final".
4. El 10 de octubre de 2008, la Corte Suprema de Justicia resolvió dentro de los recursos de revisión 1, 2 y 4/2008 del caso "Gonzáles Díaz y otros" que:

² Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Opinión Consultiva oc-3/83", septiembre de 1983, Costa Rica, página 17, punto 56.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

- "... imponer la pena de muerte cuando la víctima no fallece como producto del delito de plagio o secuestro (...) es extender dicha pena a un caso que no se encontraba contemplado en su versión original (Decreto 17/73 del Congreso de la República de Guatemala) con lo que se viola el artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ratificado por el Estado de Guatemala desde 1978 a través del Decreto 6/78 aceptando Guatemala no extender la pena de muerte a casos no contemplados en la ley, conllevando que si posteriormente se impone en los casos antes indicados hará incurrir en responsabilidad al Estado de Guatemala y a sus funcionarios (opinión consultiva OC-14/94...)".³
5. La Corte de Constitucionalidad, con fecha 11 de febrero de 2016, dentro del expediente 1097-2015, resolvió declarar inconstitucional la frase: "sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, **se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa**" del artículo 132 del Código Penal, que regula el asesinato. Exponiendo las razones siguientes:
- "(...) esta Corte estima que el término de peligrosidad contenido en la frase impugnada como elemento decisivo para la imposición de una pena, resulta lesivo al principio de legalidad, por cuanto solo pueden ser punibles las acciones calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Debido a que la peligrosidad constituye una característica endógena cuya naturaleza eventual inherente impide determinar con precisión cuál es el bien jurídico tutelado que podría ser lesionado, la sanción que se imponga estaría vinculada a una conducta hipotética, la que de acuerdo al postulado constitucional citado, no sería punible."
 - "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con

³Gilardone, Lucas, "Guía de prohibiciones para la aplicación de la pena de muerte en Guatemala" Guatemala, noviembre 2011, páginas 30-31.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

medidas no penales, previa verificación de la efectiva existencia de la conducta típica, de tal forma que no se incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, se ha pronunciado en cuanto a la valoración de la peligrosidad del agente por parte del juzgador, considerándola un retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos, al imponer una sanción no con base en lo que ha hecho el infractor, sino en lo que es (caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia de veinte de junio de dos mil cinco)."

- "Conforme lo anterior, la frase impugnada vulnera el artículo 17 constitucional, por lo que es meritoria su expulsión del ordenamiento jurídico."
- "(...) este Tribunal estima que la frase impugnada, concretamente en cuanto que a quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa, vulnera el contenido del artículo 19 constitucional, cuyos fines son la readaptación social y la reeducación. Esta Corte ha sostenido que estos son, en esencia, los principios rectores que en el sistema jurídico nacional han de regir el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado; de esa cuenta, tanto en su configuración abstracta (a cargo del órgano legislativo), como en su aplicación y ejecución en caso concreto (a cargo de los jueces ordinarios, en especial quienes están a cargo de la fase de ejecución), la pena, como consecuencia jurídica sobreviniente ante la comisión de una conducta prohibida, debe perseguir como fin último la resocialización de quien la ha cometido, buscando impedir que incurra nuevamente en la conducta sancionada (prevención especial positiva). Así, la postura general asumida en diversos tratados en materia de derechos humanos, en los que la persona humana se concibe como "sujeto y fin del orden social", es que las penas deben dirigirse a lograr la readaptación social del sujeto."
- "De esa cuenta, la frase a quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa, contraviene los fines de la pena previstos en el artículo 19 constitucional, por lo que es meritoria su expulsión del ordenamiento jurídico."

Atendiendo a los antecedentes antes expuestos, es necesario, así mismo, revisar los delitos que a la fecha son sancionados con la pena capital dentro de la





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

legislación vigente, a efecto de determinar a cuántos de ellos le son aplicables los anteriores argumentos que, a criterio de esta Comisión, hacen dicha sanción ineficaz a la luz de la interpretación de la Constitución Política de la República de Guatemala en armonía con el Pacto de San José de Costa Rica y las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Delitos con pena de muerte vigente en el Código Penal y sus reformas:

Art.	Delito
CODIGO PENAL	
131	<p>ARTICULO 131.- Parricidio.</p> <p>Quien conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. <i>Se le impondrá pena de muerte</i>, en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare <i>una mayor y particular peligrosidad en el agente</i>.</p> <p><i>A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa.</i></p>
132BIS	<p>ARTICULO 132.- *Ejecución extrajudicial-BIS-.</p> <p>Comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos políticos; en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones.</p> <p>Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes,</p>





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

	<p>subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas.</p> <p>El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.</p> <p>Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión, en cualesquiera de los siguientes casos:</p> <p>a) Cuando la víctima sea menor de doce años de edad o persona mayor de sesenta años.</p> <p>b) Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor peligrosidad del agente.</p> <p>*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 48-95 Del Congreso de la República de Guatemala. Entró en vigencia en el año de 1995.</p>
201	<p>ARTICULO 201.- Plagio o secuestro.</p> <p>A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a cincuenta años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante.</p> <p>Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de veinte a cuarenta años de prisión.</p> <p>A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios, será sancionado con prisión de veinte (20) a cuarenta (40) años y multa de cincuenta mil (Q. 50,000.00) a cien mil Quetzales (Q. 100,000.00). Este delito se considera consumado, cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se</p>





Congreso de la República
Guatemala, C. A.

	encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente, por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante.
201BIS	<p>ARTICULO 201.- * BIS.</p> <p>Comete el delito de tortura, quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o, por ese medio, a otras personas.</p> <p>Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo.</p> <p><i>El o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro.</i></p> <p>No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público.</p> <p>El o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de veinticinco a treinta años.</p> <p><i>*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 58-95 Del Congreso de la República de Guatemala. Entró en vigencia en el año de 1995.</i></p>
201 TER	<p>ARTICULO 201.- * Desaparición forzada TER.</p> <p>Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones.</p> <p>Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de</p>





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

	<p>fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.</p> <p>El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.</p> <p>El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere".</p> <p>*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 33-96 Del Congreso de la República de Guatemala. Entró en vigencia en el año de 1995.</p>
383	<p>ARTICULO 383.- CASO DE MUERTE.</p> <p>Quien matare al Presidente de la República, Vicepresidente de la República o cualquiera de los Presidentes de los otros Organismos del Estado, será sancionado con prisión de 30 a 50 años.</p> <p>En caso de muerte del Presidente de la República o del Vicepresidente, si las circunstancias del hecho, los medios empleados para realizarlo y los móviles determinantes, se revelare mayor y particular peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de muerte.</p>
<p>LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD, dto. 48-92, entró en vigencia en el año 1992.</p>	
52	<p>ARTICULO 52.- Delitos Calificados por el Resultado.</p> <p>Si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley, resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o treinta años de prisión, según las circunstancias del hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de doce a veinte años de prisión.</p>





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

FINALIDAD DE LAS INICIATIVAS:

Iniciativa 4941: *"La función de la pena debe estar relacionada al desenvolvimiento mismo de la sociedad; una sociedad sana requerirá de pequeños castigos para sus transgresores, pero una sociedad maleada, profundamente sumergida en el delito, requiere de sanciones más fuertes que respondan necesariamente a la medida del daño que se cauce. De esto deviene la obligatoriedad que la Ley Penal debe ser absoluta, no se puede hablar de justicia a medias ni de preservación social a medias. Implica la observancia y aplicación absolutas de sus normas en forma inexorable"*⁴ (el resaltado es propio).

Iniciativa 5038: *"La Pena de Muerte es una sanción contemplada dentro de la Constitución Política de la República en su artículo 18 y que ante los hechos delictivos de la actualidad se convierte en un instrumento de defensa y sobre todo de justicia ante la criminalidad, mismo que es legal y constitucional pues se aplica dentro de un debido proceso que observa y garantiza los derechos del imputado (contrario a los linchamientos y políticas de limpieza social prácticas recurrentes dentro de nuestro país), los Constituyentes consideraron la Pena de Muerte como parte de la política criminal aplicada por el Estado Guatemalteco y como el castigo a quienes han cometido delitos puntuales"*⁵ (el resaltado es propio).

De los textos citados, de ambas iniciativas, fácilmente se desprende que la finalidad de estas es la búsqueda de la aplicación de la pena capital como método para frenar la criminalidad que existe en el país. Ya que actualmente no es aplicable, a criterio de los ponentes, en virtud que no existe una regulación de la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena.

ANÁLISIS SOBRE LA FORMA:

Resulta importante indicar lo manifestado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH– en Guatemala en relación a las iniciativas en análisis, según oficio de fecha 15 de junio del año en curso recibido en la comisión:

⁴ Villate, Roberto, "Iniciativa 4941 que dispone aprobar Ley Procedimental de la Pena de Muerte", Guatemala, 2016, página 4.

⁵ Yax, Marcos y compañeros, "Iniciativa 5038 que dispone aprobar Ley Reguladora de la Conmuta de la Pena en los Condenados a Muerte", Guatemala, 2016, página 3.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

"Incompatibilidades de la iniciativa 4941 con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos:

- i. Las iniciativas de Ley no prevén el reconocimiento de las garantías procesales mínimas que debe tener el indulto o conmutación de la pena capital, pues no establece expresamente:
 - a. el deber de informar al condenado, el procedimiento específico para presentar su solicitud y el trámite de la misma;
 - b. la posibilidad de ser oído o de formular declaraciones en persona o por vía de un asesor letrado ante la autoridad competente (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en el caso Rudolph Bautiste contra Granada). Estos aspectos relativos al debido proceso son de obligatoria observancia para el Estado de Guatemala de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos (Art. 4.6 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Art. 6.4 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
- ii. Las iniciativas de Ley en el artículo transitorio (iniciativa 4941) y en el artículo 8 (iniciativa 5038), al establecer la presunción de rechazo del recurso (denegación tácita), por el mero transcurso del tiempo sin que el Presidente de la República se pronuncie, vulnera el derecho a recibir una decisión de la autoridad dentro de un plazo razonable antes de la ejecución (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en el caso Rudolph Bautiste contra Granada), con lo cual el Estado deja de cumplir su obligación de desarrollar las posibilidades del recurso. A la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos mientras la autoridad competente de conocer y resolver no haya dictado una resolución, la pena es inaplicable.⁶ Asimismo, la falta de resolución por parte de la autoridad, en ningún caso debe ser aplicada en sentido negativo, debido a que la pena de muerte es una sanción de naturaleza excepcional que compromete el derecho a la vida, por lo que el Estado está obligado a garantizar que las normas y procedimientos sean interpretados y aplicados a favor de

⁶ La Convención Americana de Derechos Humanos expresamente establece en el Art. 4.6 "Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente."





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

la persona condenada y que no contengan criterios que permitan decisiones arbitrarias.

- iii. Las iniciativas de Ley establecen que denegado el recurso expresamente, la ejecución de la pena de muerte debe realizarse dentro de las siguientes 24 horas (iniciativa 4941) o dentro de las siguientes setenta y dos horas (iniciativa 5038), lo cual menoscaba el derecho del condenado a ejercer otros recursos con posterioridad a la denegación del indulto, como el amparo o recursos ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, sobre la base de los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala.

Preocupa a la OACNUDH que los contenidos de la iniciativa de Ley puedan orientarse a agilizar las ejecuciones de pena de muerte, desnaturalizando el recurso de gracia o indulto y desconociendo los estándares y las obligaciones internacionalmente adquiridas en materia de derechos humanos por el Estado de Guatemala. En este contexto, dichas iniciativas de Ley, contradicen abiertamente las manifestaciones de voluntad del Estado de Guatemala al emitir su voto favorable en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que exhortó a los Estados a establecer una moratoria en las ejecuciones con miras a abolir la pena capital y a observar las normas internacionales que establecen salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte.⁷

Por lo que las iniciativas no sólo adolecen de ineficacia en relación al procedimiento (forma) como lo hace ver la OACNUDH, sino también adolecen de ineficacia en relación al fondo del asunto, puesto que las penas, aunque fueran objeto de procesos penales que no adolecieran de vicios de procedimiento, sí adolecen de vicios de inconstitucionalidad por los elementos subjetivos del tipo penal en que se fundamentan o por la entrada en vigencia de los mismos al amparo de una norma prohibitiva expresa que conforma parte del bloque de

⁷ Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la suspensión del uso de la pena de muerte son: la Resolución 62/149 del 15 de noviembre 2007, Resolución 63/168 de 18 de diciembre de 2008, Resolución y 65/206 del 21 de diciembre de 2010, y resolución 67/176 del 20 de diciembre 2012, todas aprobadas por Guatemala.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

constitucionalidad, como lo es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que se desarrolla a continuación.

ANÁLISIS SOBRE EL FONDO:

Atendiendo al análisis de forma realizado y a los antecedentes citados en la primera parte del presente dictamen, resulta inviable la imposición de la pena de muerte para los delitos en los que está tipificada, en virtud de las siguientes razones:

1. Su tipificación y sanción con la pena máxima es posterior a la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por el Estado de Guatemala en el año 1978;
2. Dentro del tipo penal se establece que el motivo para imponer la pena de muerte es la peligrosidad del agente; ó,
3. Se impone la pena de muerte obligatoria.

1. Su tipificación y sanción con la pena máxima es posterior a la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por el Estado de Guatemala en el año 1978:

Los delitos de ejecución extrajudicial y tortura entraron en vigencia en el año 1995, el de desaparición forzada en el año 1996 y por último, la Ley Contra la Narcoactividad en 1992.

En virtud de lo anterior, la imposición de la pena de muerte para la comisión de dichos delitos, carece de efectividad por haber entrado en vigencia con posterioridad a la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; lo cual violenta el artículo 4 de dicho instrumento.

En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que: "... si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga a delitos para la cual no estaba prevista anteriormente"⁸.

⁸ Op.cit., CIDH, "Opinión Consultiva oc-3/83".





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

2. Dentro del tipo penal se establece que el motivo para imponer la pena de muerte es la peligrosidad del agente

Los delitos de parricidio y de magnicidio fueron tipificados en la legislación penal guatemalteca previo a la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estos delitos, sin embargo, se establece que la razón para imponer la pena de muerte es que exista una **mayor y particular peligrosidad del responsable**. A este respecto ya se han pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad según sentencia de fecha 11 de febrero de 2016, dentro del expediente 1097-2015, la cual se cita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

De allí que resulta ineficaz aplicar la pena de muerte basado en estos argumentos. A cualquier persona que se le aplique, puede argumentar ante ambas cortes que la misma atenta contra el principio de legalidad y por ende resulta inconstitucional, lo cual hace que la sanción no cumpla con el efecto que busca.

3. Se impone la pena de muerte obligatoria

Para el delito de plagio o secuestro y tortura, se establece la pena de muerte, al respecto es necesario resaltar que la regulación vigente del delito de plagio o secuestro en el Código Penal prevé como pena única y obligatoria la de muerte. En estos casos, se corre el riesgo que los tribunales de justicia impongan automáticamente la pena capital, sin tomar en cuenta el carácter restrictivo de ésta, así como el principio de proporcionalidad de la pena, el cual exige a la autoridad contar con parámetros para evaluar la proporcionalidad del delito y al grado de culpabilidad personal de su autor.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha calificado la pena de muerte "única u obligatoria" como violatoria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁹.

Por su parte, la Comisión ha afirmado que: "*La pena de muerte obligatoria no se puede conciliar con el artículo 4 de la Convención en otro aspecto sustancial.*"

⁹ Comunicación 1421/2005, *Larrañaga contra Filipinas*, dictamen del 24 de julio de 2006; Comunicación 806/1998; *Thompson contra San Vicente y las Granadinas*, dictamen del 18 de octubre del 2000; en el mismo sentido Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Raxcacó contra Guatemala*, sentencia sobre el fondo, 15 de septiembre de 2005, párrafos 79 y 80, parte dispositiva párrafo 5.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

*Como se indicó, la Corte Interamericana subrayó varias restricciones a la implementación de la pena de muerte que derivan directamente de los términos del artículo 4 de la Convención. Esas restricciones incluyen aspectos relacionados con la naturaleza del delito en particular y con los factores vinculados a las circunstancias de cada delincuente. De manera que el propio artículo 4 de la Convención presume que, para que se pueda imponer legalmente la pena de muerte, debe mediar la oportunidad de considerar ciertas circunstancias individuales del delincuente y del delito...*¹⁰

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la regulación vigente del delito de plagio o secuestro en el Código Penal guatemalteco ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito¹¹. También ha señalado que "El artículo 201 del Código Penal, tal como está redactado, tiene como efecto someter a los acusados del delito de plagio o secuestro a procesos penales en los que no se consideran –en ninguna instancia– las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del autor del delito". Además de lo ya expuesto por la Corte Suprema de Justicia y citado en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

CONCLUSIONES:

Esta Comisión, al analizar ambas iniciativas estima que las mismas no son viables por regular un procedimiento para penas que, aun estando vigentes, carecen de eficacia jurídica, representan un retroceso en cuanto a los avances que ha tenido el país hacia la abolición de este tipo de sanciones y porque no está probado que sirvan para alcanzar el fin que los ponentes buscan, como lo es la reducción de la criminalidad en el país.

A este argumento hace falta agregarle que, de ser aprobado el procedimiento, resultará en una burla para la población guatemalteca y una frustración para los defensores de la pena capital, en virtud que los delitos a los cuales les aplica el

¹⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, "La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de restricción a abolición", 2011, página 30.

¹¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Raxcacó Reyes contra Guatemala*, sentencia sobre el fondo, 15 de septiembre de 2005, párrafo 79





Congreso de la República
Guatemala, C. A.

procedimiento, por estar sancionados con la pena de muerte, esta última ya no les es aplicable, por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Y por ende resulta un procedimiento infértil, ineficaz y que únicamente alarga el fenómeno del *corredor de la muerte*¹², en virtud que Guatemala ya se encuentra en una moratoria de hecho de la aplicación de este tipo de pena y la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, han optado por la conmutación de las penas capitales pendientes de ejecución¹³.

Por lo antes expuesto la Comisión de Reformas al Sector Justicia emite **DICTAMEN CONJUNTO DESFAVORABLE** a las iniciativas 4941 y 5038, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo.

**DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE REFROMAS AL SECTOR JUSTICIA,
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.**


Dip. Héctor Leonel Lira
Reformas al Sector Justicia
Presidente



¹² Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, “La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de restricción a abolición”, 2011, página 200.


¹³ Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, “Informador Estadístico del OJ Número 33 Ramo Penal: Estadística de sentenciados a pena de muerte pendientes de ejecución”, Guatemala, 2011.

4



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

COMISION REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA


Dip. Cesar Emilio Fajardo

VICEPRESIDENTE

Dip. Juan José Porras

SECRETARIO


Dip. Carlos Enrique López


Dip. Nineth Varencá Montenegro

Dip. Carlos Martínez

Dip. Raúl Romero Segura

Dip. Dorian Taracena Godínez


Dip. Mayra Alejandra Carrillo


Dip. Cornelia Gonzalo García

Dip. Delia Emilda Back de Monte

Dip. José Alejandro de León

